

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	110013343-064-2019-00182-00
Demandante	Enrique Anacona Chanchi y otros
Demandado	Nación Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros

RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

Encontrándose el expediente al Despacho correspondería a este Juzgado proveer sobre la fijación de la fecha para la audiencia inicial, sino fuese porque el Decreto Legislativo 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021 establecieron nuevas reglas procesales para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otras, en lo que tiene que ver con el trámite de las excepciones; por lo que es necesario definir la aplicabilidad de las nuevas disposiciones procesales al caso en concreto.

ANTECEDENTES

Con la finalidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa, Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, Departamento del Putumayo y el Municipio de Mocoa, contestaron oportunamente la demanda y propusieron las siguientes excepciones previas, a las que más adelante referirá esta providencia de manera detallada.

En la contestación de la demanda presentada el 9 de julio de 2020, (fl. 90) la parte demandada Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia propuso como excepciones previas la **falta de legitimación en la causa por pasiva** y **pleito pendiente**.

En la contestación de la demanda presentada el 20 de julio de 2020, (fl. 107) la parte demandada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres propuso como excepción previa la **falta de legitimación en la causa por pasiva** y la **Ineptitud sustancial de la demanda**.

En la contestación de la demanda presentada el 4 de agosto de 2020, (fl. 107) la parte demandada Departamento del Putumayo propuso como excepciones previas la de **pleito pendiente**

En la contestación de la demanda presentada el 14 de agosto de 2020, (fl. 109) la parte demandada Municipio de Mocoa No propuso excepciones previas que deban ser analizadas en esta etapa procesal.

En la contestación de la demanda presentada el 18 de agosto de 2020, (fl. 111) la parte demandada Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso la excepción previa de **falta de legitimación en la causa por pasiva**.

CONSIDERACIONES

La versión original del CPACA, en su artículo 180 señalaba, que en el curso de la audiencia inicial, el juez o Magistrado Ponente resolvería «sobre las excepciones previas y las [mixtas] de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva» y, que de requerirse la práctica de pruebas para poder emitir un pronunciamiento al respecto, se suspendería la diligencia para recaudarlas por un término máximo de 10 días, tras el cual se reanudaría la audiencia y se decidiría la respectiva excepción. Así mismo, la norma establecía que el auto que decidiera sobre las excepciones sería susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

Éste panorama normativo cambió radicalmente luego de la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020 y de la Ley 2080 de 2021, como pasa a explicarse:

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN EL DECRETO LEY 806 DE 2020.

El artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 señaló, que durante los dos años siguientes a su expedición, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo las excepciones se tramitarían de la siguiente manera:

«Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez; subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.» (Subrayado fuera del texto).

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN LA LEY 2080 DE 2021.

Ahora bien, en lo que respecta al trámite y decisión de las excepciones en el proceso contencioso administrativo, el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, de manera tácita derogó el artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 antes comentado, y de forma expresa, modificó el artículo 175 del CPACA, para agregarle a éste último un segundo párrafo, del siguiente tenor:

«Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:

(...)

Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A»

Se insiste, que de acuerdo con la versión original del CPACA, artículo 180, numeral 6, las excepciones previas debían ser resueltas en el marco de la audiencia inicial. Pero, a partir de la expedición de la Ley 2080 de 2021,⁴⁹ artículo 38, como viene expuesto, las excepciones previas se decidirán atendiendo al procedimiento establecido en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, es decir, a través de un auto por escrito, antes de la audiencia inicial.

El caso concreto.

En el presente asunto, se tiene que en vigencia del texto original de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) la demanda que origina la presente causa judicial, fue admitida, de igual modo se tiene que también en vigencia de la versión original del CPACA, la entidad demandada contestó la demanda; la Secretaría del Despacho dio traslado de las excepciones formuladas por el Ejército Nacional al contestar la demanda.

Por lo anterior, como quiera que en el proceso de la referencia lo que sigue es la fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, y que no hay términos corriendo, ni trámite o diligencia alguna iniciada que esté pendiente de resolución, al sub judice son perfectamente aplicables las normas de índole procesal previstas en la Ley 2080 de 2021, según el principio del *efecto general inmediato* consagrado en el régimen de vigencia y transición de dicha ley.

Bajo ese parámetro corresponde al Despacho resolver las excepciones previas propuestas por las demandadas, antes de la audiencia inicial, a través de auto por escrito en aplicación de las nuevas reglas procesales señaladas en la Ley 2080 de 2021.

Estudio de las excepciones previas en el caso concreto.

1.- Pleito Pendiente

La Parte demandada Departamento del Putumayo, Señaló que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa la acción de grupo No. 25000234100020170068700, promovida por la señora Maria Rosa Ordoñez, en nombre propio y en representación de su menor hijo Laureano Hernando Gómez y las demás que hayan sido afectadas por los hechos vulnerantes, que según el decir del Departamento del Putumayo guarda identidad de causa, de partes y de pretensiones con el presente medio de control.

Adujo que, a parte actora en el presente medio de control, no solicitó su exclusión del grupo por lo que integran el grupo de la acción promovida por Maria Rosa Ordoñez Gómez.

Por su parte la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, indicó que existe una acción de grupo promovida por la señora Maria Rosa Ordoñez Gómez, que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado 25000234100020170068700, así como la acción de grupo 52001233300220190019500 promovida por Eugenia Lily Mojhana Solarte la que cursa en el Tribunal Administrativo de Nariño, la acción de grupo No. 11001334306020190007900 promovida por Aldenis

Ortega Gutiérrez y otra que cursa en el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá y la 520012333000-2019-00183-00 promovida por el grupo de afectados avenida fluvio torrencial – Mocoa, que cursa en el Tribunal Administrativo de Nariño.

Consideró que las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo a solicitud del interesado, y como quiera que en la actualidad cursan 96 demandas de reparación directa por los mismo hechos, éstas deben acogerse a las resultas de la acción de grupo más antigua.

Argumentos del Despacho

El Medio de Control de Reparación Directa, se encuentra regulado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-C.P.A.C.A-, el cual tiene como finalidad que la persona que se vea afectada por los daños antijurídicos producidos por las acciones u omisiones en las que incurran agentes del Estado podrán demandar directamente a éste. Ahora bien, la Ley 472 de 1998, en el artículo 46º, consagra la acción de grupo, en donde se indica que son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas y se ejercerá únicamente para el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios.

Respecto de la integración del grupo, el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, dispone:

“Artículo 55. Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida

en ella. Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.

En virtud de la norma anterior, existen dos momentos procesales para integrarse al grupo, el primero de ellos, “antes de la apertura a pruebas”, mediante la presentación de un escrito con los requisitos señalados en la disposición transcrita y el segundo, “dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia”.

A su vez, el artículo 56 de la misma ley, regula la exclusión de los miembros del grupo:

“Artículo 56. Exclusión del grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos situaciones:
a) Cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior;
b) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso, demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación. Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios”.

De acuerdo a la norma citada, sólo pueden excluirse del grupo, quienes lo hagan de manera expresa, únicamente dentro del término señalado en el artículo 56 de la ley citada, dentro de los cinco (5) días posteriores al término de traslado de la demanda. De lo contrario de no solicitar la exclusión, los miembros del grupo se someten a los resultados del proceso.

Ahora bien para que se configure la figura de pleito pendiente se requiere: *Que exista otro proceso en curso; que las partes sean unas mismas; que las pretensiones sean idénticas; que por ser la misma causa estén soportadas en iguales hechos¹”*

¹ HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO. INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL COLOMBIANO PARTE GENERAL, Tomo 1, Págs. 938 y s.s. Novena Edición. Dupré Editores. Bogotá. 2005

Respecto al pleito pendiente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que dicha excepción tiene por finalidad evitar la existencia de dos o más juicios con idénticas pretensiones y entre las mismas partes, así como juicios contradictorios respecto de las mismas pretensiones y respecto de los presupuestos para la viabilidad de la excepción, ha determinado los siguientes: “i) la existencia de otro proceso vigente, en el cual se haya notificado a la parte demandada el auto admisorio de la demanda y que no se halle en firme la sentencia; (ii) que exista identidad de elementos en los dos procesos en cuanto a las partes, hechos (causa) y pretensiones (objeto), y (iii) que el segundo proceso se instaure cuando no ha terminado el primero ²”.

También ha señalado que **“como quiera que la vinculación al grupo es voluntaria, la norma contempla la posibilidad de la existencia de acciones individuales, relativas a los mismos hechos, al permitir la acumulación de éstas a la acción de grupo. Sin embargo, esa acumulación depende de la voluntad del actor individual, por lo tanto, el juez no puede efectuarla de oficio, porque al hacerlo viola la autonomía de la voluntad del actor, que a pesar de que fue víctima de una acción u omisión que le causo perjuicios a un número plural de personas, decidió ejercer una acción individual en lugar de conformar el grupo que presentó la demanda. En consecuencia, debe entenderse que la interposición de una acción individual debe ser entendida como una manifestación de voluntad de exclusión de grupo”³**

Bajo los anteriores planteamientos legales y jurisprudenciales, para el Despacho no se configura la excepción de pleito pendiente en virtud que la acción de grupo se trata de una acción constitucional mientras la reparación directa una acción de carácter indemnizatoria, y en el sub lite no se puede establecer que en las acciones de grupo que cursan por los hechos relacionados con la inundación ocurrida en el Municipio de Mocoa el 1 de abril de 2017, las partes sean las mismas que acuden al presente medio de control, pues no se tiene certeza de que el actor sea parte en las acciones de grupo referidas; por el contrario, de conformidad con el auto antes transcrito, se entiende que con la interposición del medio de control de reparación directa, el demandante optó por reclamar sus pretensiones de manera individual, situación que lo excluye del grupo que accionó a través del mecanismo constitucional.

En consecuencia, el despacho declarará **no probada** la excepción formulada por el Departamento del Putumayo, y Corpoamazonía.

2.- Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 11 de julio de 2019, exp. 08001-23-33-004-2014-01573-01(57428), C.P. María Adriana Marín

³ Auto del 7 de julio de 2011, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero

La parte demandada **Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia** propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido de que la Corporación no fue determinante en los hechos por los que se demanda, y su conducta no fue omisiva, pues actuó en el marco de sus obligaciones legales, por lo que consideró que la Corporación no puede soportar los efectos de la sentencia

Por su parte la demandada **Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres**, argumentó que la Unidad de acuerdo con el artículo 1 del decreto ley 4147 del 2011, es una entidad pública del nivel nacional descentralizada por servicios con personería jurídica.

Consideró que las presuntas omisiones que endilga la parte demandante en materia de gestión del riesgo, son de competencia de las entidades territoriales y las Corporaciones Autónomas Regionales las que cuentan también con personería jurídica y que de conformidad con lo establecido en la ley 1523 de 2012, son los alcaldes los responsables directos de la implantación de los procesos de desarrollo local y de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su jurisdicción, razones por las que consideró que la unidad no está legitimada en la causa dentro del presente medio de control.

A su vez el **Ministerio de Medio Ambiente**, argumentó que la cartera ministerial solo puede actuar y asumir compromisos en orden a lo estrictamente facultado por la Ley, y no puede asumir responsabilidades por fuera de su competencia; en ese orden, solicitó para decidir la excepción de falta de legitimación tener en cuenta el decreto 3570 de 2011.

Argumentos del Despacho

Frente al particular, debe indicar el Despacho que la legitimación ha sido clasificada en legitimación **de hecho y material**; la primera de ellas referida al interés conveniente y proporcionado del que se da muestra al inicio del proceso; la segunda objeto de prueba y que le otorgará al actor la posibilidad de salir adelante en las pretensiones solicitadas, previo análisis de otras condiciones.

Además conviene precisar que la primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la pretensión, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho por pasiva.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado entre la legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material:

*“...la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues **ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza**, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.”*

Frente a las excepciones propuestas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Medio Ambiente, debe señalar el despacho que se mencionó en los hechos de la demanda, que dichas entidades omitieron el cumplimiento de sus deberes y obligaciones legales, lo que incidió en los hechos acaecidos el 1 de abril de 2017. En este orden de ideas, considera el Despacho que los argumentos de las demandadas están encaminados a desvirtuar la falta de legitimación en la causa por pasiva material, y dadas las imputaciones realizadas por la parte actora, en principio las demandadas estarían legitimadas en la causa por pasiva de hecho, al margen de que en el curso del proceso y en virtud de las pruebas aportadas al plenario, no resulten responsables por los hechos que se les imputa, razón por la cual la excepción se **declarará no probada**.

3.- Ineptitud Sustancial

La parte demandada **Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres**, argumentó que la parte actora le atribuyó a la entidad una presunta responsabilidad con ocasión aun daño causado por un destare o hecho de la naturaleza, cuyo factor determinante fue el presunto incumplimiento de un deber atribuido por el ordenamiento legal; no obstante la parte actora no cumplió con la carga de señalar con precisión cuál fue el presunto incumplimiento de ese deber jurídico, tampoco indicó las normas jurídicas que rigen las actuaciones de las autoridades públicas demandadas.

Argumentos del Despacho

Precisa el despacho que el artículo 100 del CGP, establece que la ineptitud de la demanda se configura por la – falta de requisitos formales, o por la indebida acumulación de pretensiones, en el presente evento se estudia la falta de requisitos formales, concretamente los hechos y omisiones.

Establece el artículo 162 de la Ley 1437 como contenido de la demanda:

“ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

(...)

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

(...).”

De conformidad con la anterior lectura, la norma es clara determinar las cualidades que deben revestir la demanda, en ese orden de ideas, revisado el libelo introductorio se observa que la parte demandante consignó su escrito de demanda de acuerdo con los requisitos legales (f. 02-7) como lo indica la norma previamente transcrita.

La demanda contiene 28 hechos debidamente clasificados y enumerados, de los que se evidencian las omisiones endilgadas a la UNGRD, que se concretan en el desconocimiento del artículo 4 del decreto 4147 de 2011 (hecho 22) Es decir, el libelo cumple con los requisitos de contenido específicamente en el sentido de señalar los hechos y omisiones que se le endilgan a la entidad.

La circunstancia de que se encuentren probadas tales hechos u omisiones, corresponde a un asunto que se debe valorar al momento de emitir sentencia, una vez recaudado y practicado el caudal probatorio.

Razón por la cual no se configuró motivo alguno de inadmisión de la demanda por dicho requisito y por lo tanto no resulta demostrada la configuración de inepta demanda por no haber indicado los hechos y omisiones.

En razón a lo anterior, el Despacho **DECLARARA NO** probada la **EXCEPCIÓN INEPTA DEMANDA**, por las razones anteriormente expuestas.

Por lo anterior el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: TENER por presentada en tiempo la contestación de las entidades demandadas Nación- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, Departamento del Putumayo y el Municipio de Mocoa, conforme al término previsto en el artículo 172 del CPACA.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE formulada por el Departamento del Putumayo y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA formulada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Medio Ambiente.

CUARTO: DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANCIAL formulada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

QUINTO: Una vez en firme la presente providencia **ingrésese** el expediente al Despacho para fijar fecha y hora de audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Reconocer personería al abogado **Darío Francisco Andrade Enríquez** identificado con cedula de ciudadanía No. 76.331.541 y T.P. 132.083 del C. S de la J, como apoderado de CORPOAMAZONIA. Correos electrónicos oficinajuridicacorpoamazonia@gmail.com y notificacionesjudiciales@corpoamazonia.gov.co


SEPTIMO: Reconocer personería al abogado **Pedro Manuel Avendaño Laiton** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.022.324.104 de Bogotá. Y T. P. No. 255.618 del C. S. J como apoderado del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Correo procesosjudiciales@minambiente.gov.co.

NOVENO: Reconocer personería a la abogada **Ely Milena Galeano Doria** identificada con cedula de ciudadanía N°. 50.985.121 de San Pelayo - Córdoba. T.P. N° 169878 del C.S. de la J como apoderado del Departamento del Putumayo. Correos: notificacionesjudiciales@putumayo.gov.co y elymilena19@gmail.com

DECIMO: Reconocer personería al abogado **Jheison Ortiz Bernal** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.372.253 y T.P. 236.760 CSJ como apoderado del Municipio de Mocoa Correos: juridica@mocoa-putumayo.gov.co y jheisonortizbernal@gmail.com

DECIMO PRIMERO: Reconocer personería a la abogada **Gisela Maria Daza Taborda** identificada con cedula de ciudadanía No. 26.039.265 y T.P. 179.131 CSJ como apoderado de la UNGRD Correos: notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


MAGDA CRISTINA CASTANEDA PARRA
JUEZ

110013343-064-2019-00182-00
Enrique Anacona Chanchi y otros
Nación Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros